SALA PENAL DE APELACIONES - Sede Central

Expediente : 03899-2019-27-2301-JR-PE-01.

Imputado : David Ruiz Loayza y otros.

Delito : Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Agraviado : El Estado.

AUTO DE VISTA

Resolución Nro. 32

Tacna, nueve de julio del dos mil veintidós.

VISTOS: En la audiencia virtual llevada a cabo vía Hangouts Meet, interviene como director de debate el **Juez Superior (P) Franco Apaza**.

Es materia de alzada los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la defensa técnica del imputado Iván Tirado Rebaza en contra de la resolución número cinco, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, en los extremos que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra de Jhoel Huanca Ticona por los delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en agravio del Estado (respectivamente), y fundado el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra de Iván Tirado Rebaza como cómplice primario del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado; así como el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución número veinticinco, de fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, en los extremos que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra de Jhon Erald Clemente Velásquez, Sidgar Luis Campos Velásquez y Javier Branko Paredes Velasco por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado, además, en los seguidos contra Jampier José Lévano

Hernández por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado.

Con lo informado en la vista de la causa y lo obrante en el expediente de la materia; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Hechos materia de investigación.

1.1. De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva¹, se tiene lo siguientes hechos materia de investigación:

a) Respecto al delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Nº	Hecho	Imputados	Grado de participación
04	Solicitud de dinero de parte del efectivo policial S2 PNP David Ruiz Loayza, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a Estanislao Mamani Espinoza a través del abogado Iván Antony Tirado Rebaza, a fin de no imponerle papeleta de infracción al Reglamento Nacional de Transito por el hecho de conducir en estado de ebriedad el treinta de diciembre del dos mil veinte.	David Ruiz Loayza	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)
05	Solicitud de dinero de parte del efectivo policial PNP Jiamper José Lévano Hernández, asignado a la Comisaría del Distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a Julio Barrientos Marce a través del abogado Iván Antony Tirado Rebaza, a fin de no ponerlo a disposición de la oficina de transito por conducir sin licencia de conducir, sin SOAT y revisión técnica vencida el diecinueve de enero del dos mil veintiuno, lo que generó la no imposición de papeleta de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito.	Jiamper José Lévano Hernández	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)

¹ Véase folios 01 y siguientes, Tomo I.

06	Solicitud de dinero a Edwin Rubén Aguilar Aguilar a través del abogado Iván Antony Tirado Rebaza por el S2 PNP David Ruiz Loayza, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a fin de no imponerle una papeleta de infracción al Reglamento Nacional de Transito por conducir en estado de ebriedad el veinte de enero del dos mil veintiuno.	David Ruiz Loayza	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)
07	Solicitud de dinero a Richar Ari Mamani por parte del abogado Iván Antony Tirado Rebaza para el S2 PNP David Ruiz Loayza, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a fin de no imponerle una papeleta de infracción al Reglamento Nacional de Transito por conducir en estado de ebriedad el treinta y uno de enero del dos mil veintiuno; con la participación del SB PNP Marco Antonio hurtado Valdivia, quien contacta al abogado citado.	David Ruiz Loayza	Autor
		Marco Antonio hurtado Valdivia	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)
08	Solicitud de dinero a Javier Condori Callusani por parte del efectivo policial SB PNP Marco Antonio Hurtado Valdivia, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a través del abogado Iván Antony Tirado Rebaza a fin de no imponerle una papeleta de infracción al Reglamento Nacional de Transito por conducir en estado de ebriedad el quince de febrero del dos mil veintiuno.	Marco Antonio Hurtado Valdivia	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)
09	Solicitud de dinero a Joel David Esquivel Fabián de parte del efectivo policial S3 PNP Jhon Erald Clemente Velásquez, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a través del abogado Iván Antony Tirado Rebaza a fin de imponerle papeleta de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, esto por no portar SOAT, cuando debió ser por conducción en estado de ebriedad, que resultado de mayor gravedad.	Jhon Erald Clemente Velásquez	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)

10	Solicitud de dinero a Hernán Quiñonez Quiñonez por parte del efectivo policial S3 PNP Sidger Luis Campos Velásquez, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, utilizando como intermediario al abogado Iván Antony Tirado Rebaza a fin de no imponerle multa por infracción al incumplimiento de las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria a nivel nacional y demás normas emitidas para proteger la vida y la salud de la población por el contagio del Covid-19.	Sidger Luis Campos Velásquez	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)
13	Solicitud de dinero a Oswaldo Atencio Maquera por parte del efectivo policial S3 PNP Jhon Erald Clemente Velásquez, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a través del abogado Christian Diego Alvites Huiza para librarle de la imposición de papeleta por infracción a las normas de tránsito, signada con código M-01.	Jhon Erald Clemente Velásquez	Autor
		Christian Diego Alvites Huiza	Cómplice primario (extraneus)
15	Solicitud de dinero a Alfredo Ramírez Capaquera por parte del efectivo policial S2PNP Javier Branko Paredes Velazco, asignado a la Comisaría del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, a través de Iván Antony Tirado Rebaza para no imponerle papeleta de infracción, signada con el código M-02, por conducir en estado de ebriedad el siete de agosto del dos mil veintiuno.	Javier Branko Paredes Velazco	Autor
		Iván Antony Tirado Rebaza	Cómplice primario (extraneus)

b) Respecto al delito de tráfico de influencias.

Nº	Hecho	Imputados	Grado de participación
16	En calidad de instigador se imputa a Jhoel Huanca Ticona toda vez que, ante la propuesta realizada por los abogados Iván Antony Tirado Rebaza y Víctor Armando Gonzales Condori, consistente en desembolsar la suma de S/.	Iván Antony Tirado Rebaza	Autor

	5,000.00 soles, para supuestamente pagar al Fiscal con la finalidad de que este archive la investigación seguida en el Caso N° 2019-1613, acepta conseguir el dinero, para que sea entregado al Fiscal, reforzando con su actuar la resolución criminal de los autores Iván Antony Tirado Rebaza y Víctor Armando Gonzales Condori, dinero que habría sido repartida entre los investigados Iván Antony Tirado Rebaza y Víctor Armando Gonzales Condori, en partes iguales.	Jhoel Huanca Ticona	Instigador
--	---	---------------------	------------

c) Respecto al delito de obstrucción a la justicia.

N°	Hecho	Imputados	Grado de participación
16	Jhoel Huanca Ticona conjuntamente con Víctor Gonzales Condori e Iván Tirado Rebaza, habrían ofrecido un beneficio económico a la persona de Reyna Marlene Choquegonza Gonzales, para que cambie su versión de los hechos, induciendo a la testigo/denunciante a que preste falso testimonio, en el proceso signado como Caso N° 2019-1613, a fin de favorecer de Jhoel Huanca Ticona.	Iván Antony Tirado Rebaza	Autor
		Jhoel Huanca Ticona	Autor

SEGUNDO: Objeto de impugnación.

2.1. La resolución número cinco, de fecha treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, en los extremos que declara:

- **INFUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra de Jhoel Huanca Ticona por los delitos contra la Administración Pública en las modalidades de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en agravio del Estado.
- **FUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en los seguidos en contra de Iván Tirado Rebaza como cómplice primario del delito contra la Administración Pública en la modalidad de

cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado.

2.2. La resolución numero veinticinco, de fecha diecisiete de junio del dos mil veintidós, en los extremos que declara:

- **INFUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra de los investigados Jhon Erald Clemente Velásquez, Sidgar Luis Campos Velásquez y Javier Branko Paredes Velasco por el delito en contra de la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado; y en consecuencia dicto la comparecencia simple.
- **INFUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra del investigado Jampier Lévano Hernández por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado; y en su defecto dicto la medida de comparecencia con restricciones.

TERCERO: Argumentos de los recursos de apelación y su contestación.

Respecto al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.

3.1. La **Fiscal Superior**, mediante el escrito de apelación² y los alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita que se revoque la **resolución número cinco**, en el extremo que declara infundado el pedido de prisión preventiva en contra de Jhoel Huanca Ticona, y reformándola declare fundado el requerimiento de prisión preventiva; basándose en los siguientes argumentos:

En torno al delito de tráfico de influencias:

² Véase folios 629 y siguientes, Tomo II.

- No se tuvo en cuenta que la conducta típica no solo consiste en invocar influencias, sino es indispensable que exista una aceptación de dar o prometer una ventaja solicitada, según la Casación N° 638-2018.
- Según el Acuerdo Plenario N° 03-2015/CIJ-116, el interesado responde como instigador no solo cuando hace surgir la resolución criminal, sino cuando la refuerza o fortalece.
- No se tuvo en cuenta que el investigado Jhoel Huanca Ticona es quien determina y refuerza la resolución criminal de los abogados Iván Tirado Rebaza y Armando Gonzales Condori, lo cual se aprecia del contenido de la comunicación N° 27.

En torno al delito de obstrucción a la justicia:

- No se evaluó que el delito habría quedado en grado de tentativa, lo que se acredita con las comunicaciones N° 08 y N° 10.
- Los investigados habrían realizado los actos necesarios para consumar el delito, esto es, convencer a la denunciante Choquegonza para que cambien su versión, lo que queda patente con las conversaciones del aplicativo de WhatsApp.

No se ha emitido pronunciamiento respecto al segundo y tercer presupuesto, a pesar de los fundamentos expuestos.

3.2. La defensa técnica del imputado Jhoel Huanca Ticona, mediante los alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita que se confirme la recurrida; basándose en los siguientes argumentos:

- No se ha dispuesto analizar los demás presupuestos, dado que no se ha encontrado una sospecha grave, esto de acuerdo a lo desarrollado en el Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116.
- Al no haberse analizado los demás presupuestos no es posible revocar la recurrida, lo que se debió solicitar es la nulidad.
- En torno al delito de tráfico de influencias, no se ha logrado acreditar el comportamiento idóneo.

- En la comunicación N° 27 la expresión conversar con el Fiscal no hace alusión a un contenido ilícito, pues se pueden solicitar de manera lícita citas fiscales.
- En la comunicación N° 34 no participa su patrocinado, sino solamente los abogados Iván Tirado y Armando Gonzales.
- El iter criminis se ha quedado en los actos preparatorios, dado que en ningún momento se ha dado la conducta de reforzamiento; además, no se tiene elemento de convicción que acredite la aceptación ni el pago de la supuesta coima.
- La denunciante Reyna Choquegonza nunca brindó un testimonio falso, por lo que no se llegó a consumir el delito; y, si bien se hace mención a una tentativa, esta no es admisible para este tipo de delitos.

Respecto al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Iván Antony Tirado Rebaza.

3.3. La defensa técnica del imputado Iván Antony Tirado Rebaza mediante el escrito de apelación³ y los alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita que se declare nula o alternativamente se revoque la **resolución número cinco**, en el extremo que declara fundado el pedido de prisión preventiva en contra de Iván Antony Tirado Rebaza; basándose en los siguientes argumentos:

El Juzgado evalúa el evento forense como delito continuado, pero se expresa como concurso real de delitos, lo que genera indefensión, pues correspondía que se analice por cada hecho los presupuestos de la prisión preventiva.

Sobre los graves y fundados elementos de convicción:

- En torno a los hechos 04, 06, 07, 08 y 09, en las conversaciones no se menciona para nada el tema de las papeletas de tránsito, solo

³ Véase folios 610, Tomo II.

referido al trámite de principio de oportunidad o a los honorarios del abogado.

- En torno al hecho 05, no se sabe en qué fecha habrían entregado el dinero al policía y cuál era el monto, siendo una suposición; además, el ciudadano indicó que fue el policía quien antes de la presencia de su abogado le S/. 500.00 soles, lo cual implica que el delito ya estaba consumado con la solicitud.
- En torno al hecho 10, en las conversaciones grabadas fluye un nivel de familiaridad que no es suficiente para inferir ilícitos y la responsabilidad del incumplimiento del deber está radicado en el funcionario policial.
- En torno al hecho 15, en las conversaciones se verifica el desempeño del abogado tratando que se plasme el principio de oportunidad.
- La inexistencia de papeletas de tránsito se basa en fuente abierta; sin embargo, dicha información para lo jurisdiccional no es válida, pues es una fuente no validada.

Sobre el peligro procesal:

- No se verifica frecuencia de viajes al próximo país de Chile, menos al interior de nuestro país, y una vez intervenido tampoco se aprecia acto tendiente a ello.
- La inexistencia de arraigo familiar por el hecho que el imputado no tiene compromiso matrimonial ni unión de hecho ni hijos, es discriminatorio.
- Existe arraigo familiar en el seno de un grupo constituido por su madre y tío, septuagenarios y con dolencias, quienes dependen del imputado, lo que se acredita con las declaraciones juradas notales.
- El procesado además de ser abogado, se desempeña en el ámbito de la gastronomía, conforme a la Consulta RUC y la constancia de trabajo expedida por la Cevichería "Luchito"; por lo cual, puede continuar sus actividades ajenas al de la considerada como actividad peligrosa.

- En el caso que se imponga comparecencia con restricciones se podría ordenar que se dedique a trabajar en el ámbito gastronómico, así como se podría imponer la obligación de someterse al cuidado y vigilancia del Colegio de Abogados y la prohibición de concurrir a instalaciones de la Comisaría de Gregorio Albarracín Lanchipa.

3.4. La Fiscal Superior, mediante alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita que se confirme la recurrida; basándose en los siguientes argumentos:

- Se ha comprobado que las intervenciones a los conductores no están registradas y no se ha afectado sus records de conductor.
- Se han presentado las papeletas de tránsito, pero estas cuando fueron solicitadas de manera oficial, no han sido remitidas; lo cual es un indicio que debe valorarse.
- Con respecto a las fuentes abiertas, la información proviene de páginas oficiales; por lo que, no es necesaria la validación.
- No hubo afectación al secreto profesional, pues se tiene la autorización judicial.
- Los arraigos decaen debido a la gravedad de la pena; además, porque se está delinquiendo en su condición de abogado.

Respecto al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.

3.5. La Fiscal Superior, mediante el escrito de apelación⁴ y los alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita se revoque **la resolución número veinticinco** en los extremos que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva en contra de Jhon Erald Clemente Velásquez, Sidgar Luis Campos Velásquez, Javier Branko Paredes Velasco y Jampier Lévano Hernández, y reformándola se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva; basándose en los siguientes argumentos:

En torno al investigado Jampier Lévano Hernández:

⁴ Véase folios 916 y siguientes, Tomo III.

- No se ha acreditado que los familiares del imputado, como su madre y hermano de diecisiete años de edad, dependan económicamente de forma exclusiva de él, ya que estos todavía contarían con su padre.
- Respecto a la presunta enfermedad que tendría la madre del imputado, no se presentó documentación idónea para acreditar que esta persona tendría la enfermedad que alega.
- El imputado viviría con su conviviente en otro domicilio, mas no junto a su madre.
- El arraigo laboral se encontraría debilitado, dado que habría cometido el investigado el hecho delictivo valiéndose de su condición de efectivo policial; asimismo, tampoco se tuvo en consideración que sería pasible de un proceso administrativo.
- No se ha acreditado el ingreso adicional por el negocio comercial de la pareja del investigado, pues no se encuentra corroborado con ningún documento.
- En diversas resoluciones el Juez ha considerado que la pena probable de seis años, sería suficiente para considerar que la pena es grave, lo cual no ha aplicado en el presente caso.
- El análisis de la magnitud del daño va en contra de lo desarrollado en la Casación N° 626-2013, pues esta no se puede entender como una referencia a la reparación civil.
- No se ha considerado que existe elemento de convicción que acredita el ocultamiento de prueba, puesto que, mediante el acta de deslacrado de Hallazgo se evidencia que el investigado no entregó su celular de uso diario.

En torno a los investigados Jhon Clemente Velásquez, Sidgar Luis Campos Velásquez y Javier Branko Paredes Velasco:

- No se tuvo en cuenta que la conducta típica del tipo penal postulado se configura solo con la acción de solicitar, máxime si el delito imputado es de mera actividad y este se consuma independiente de que el sujeto activo cumpla con la finalidad.

- No se ha valorado que Jhon Clemente Velásquez presumiblemente habría falsificado elementos de prueba, esto es la copia certificada de la papeleta de infracción.
- No se tuvo en cuenta las declaraciones de Hernán Quiñonez Quiñonez y Oswaldo Atencio Maquera, quienes corroborarían los registros de comunicación y el incumplimiento de imponer papeletas.
- Se ha omitido pronunciarse por los demás presupuestos procesales, tales como la prognosis de pena y el peligro procesal, lo cual vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso, pues esto impide cuestionar estos presupuestos.

3.6. La defensa técnica del imputado Jampier José Lévano Hernández, mediante los alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita se confirme la recurrida; basándose en los siguientes argumentos:

- Sobre el arraigo familiar, se ha tomado en cuenta que el imputado tiene una conviviente y existe una declaración jurada de convivencia, lo cual en cualquier proceso de unión de hecho es prueba suficiente.
- Recurriendo a las máximas de experiencia, un hijo siempre se va hacer cargo de su madre si se encuentra enferma y no puede trabajar.
- Una posible sanción administrativa no se puede establecer en base a creencias subjetivas; no tiene ningún proceso disciplinario.
- La magnitud del daño relacionada a la reparación civil no se discute en la prisión preventiva.
- La Judicatura ha señalado que, dentro de todas las medidas, la menos gravosa vendría a ser una comparecencia con restricciones; además, no existe forma de que la prisión preventiva implique un equilibrio o que justifique la presencia del imputado, porque está ya lo hace la medida de comparecencia.

3.7. La defensa técnica del imputado Jhon Clemente Velásquez, mediante los alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita se confirme la recurrida; basándose en los siguientes argumentos:

En torno al hecho 09:

- Se ha presentado una copia certificada de la papeleta de infracción N° 112217, con la infracción M-02 impuesta al Joel David Esquivel Fabián.
- No puede alegarse que la documentación es falsa, debido a que se ha obtenido mediante el trámite documentario regular.

En torno al hecho 13:

- En la investigación fiscal obra la papeleta impuesta a Oswaldo Atencio Maquera, la cual corresponde a la M-02; por lo que, no se podría probar el delito de cohecho pasivo propio.
- Las conversaciones no son de índole criminal, por el contrario, solo son comunicaciones normales entre abogado y las partes, con la finalidad de obtener mayor información.

3.8. La defensa técnica del imputado Sidgar Campos Velásquez, mediante los alegatos orales de la audiencia de alzada, solicita se confirme la recurrida; basándose en los siguientes argumentos:

- Las papeletas si se impusieron a Hernán Quiñones Quiñonez, han sido presentadas en copias certificadas porque han sido encontradas dentro de los ámbitos de la Comisaria Gregorio Albarracín.
- Si bien las papeletas no aparecen en el sistema, eso no es función del oficial; su función era detener y poner a disposición de la Comisaria; los policías a cargos debían hacer el seguimiento y subirlas al sistema.
- Quitando la ausencia de imposición de papeletas, solamente se tendría las grabaciones.
- La expresión “bajar para jugarlo” no significa de manera directa un acto de corrupción, pues son términos coloquiales que utilizan los efectivos policiales, así como los abogados.

- Su postura es que el abogado le solicitó dinero al detenido utilizando el nombre del policial, lo cual no es cohecho sino tráfico de influencias.
- No hay pronunciamiento de los demás presupuestos; sin embargo, la Sala Penal tiene las facultades para agregar una motivación respecto a estos presupuestos.

3.9. La defensa técnica del imputado Javier Paredes Velasco, mediante los alegatos orales de la audiencia de la alzada, solicita se confirme la recurrida; basándose en los siguientes argumentos:

- Respecto a los registros de comunicaciones 1, 4, 6 y 11 son llamadas con referencia a cuestiones laborales sobre la situación de una persona detenida; además, no se aprecia ningún tipo de sustento verídico que pueda implicar algún acto ilícito, tanto es así que no se ha corroborado ninguna solicitud de dinero.
- El supuesto pago de 41 soles corresponde al pago por la tasa de dosaje etílico.
- El Ministerio Público en la audiencia de primera instancia ha reconocido la veracidad de las papeletas de infracción.
- Se ha mencionado que debió imponerse la papeleta M-2; sin embargo, se impuso la papeleta M-1, que es la más grave, debido a la situación del imputado, quien colisiono con otro vehículo.
- Se ha presentado el reporte de consulta de la página web del Ministerio de Transportes, donde se verifica que la licencia del conductor estaba suspendida, lo que desbarata la inferencia de que ha intentado pagar al efectivo policial para que no se le quite su licencia.

CUARTO: Tema controvertido y su complejidad.

Del contraste entre los fundamentos de las resoluciones de primera instancia, los argumentos de los recursos de apelación y lo alegado en la audiencia de alzada, queda claro que concierne a este Tribunal Superior determinar:

- a) Si corresponde la nulidad, revocatoria o confirmación de la resolución número cinco, en el extremo que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra Iván Tirado Rebaza como cómplice primario del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
- b) Si corresponde la revocatoria o confirmación de la resolución número cinco, en el extremo que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra Jhoel Huanca Ticona por el delito de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
- c) Si corresponde la revocatoria o confirmación de la resolución número veinticinco, en los extremos que declara infundado el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra de Jhon Erald Clemente Velásquez, Sidgar Campos Velásquez, Javier Branko Paredes Velasco y Jampier Lévano Hernández por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Por consiguiente, la resolución del presente caso refleja mediana complejidad.

QUINTO: Base legal aplicable.

El artículo 268º del Código Procesal Penal prevé los siguientes presupuestos materiales: **(a)** Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; **(b)** Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y **(c)** Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

SEXTO: Análisis y reexamen del tema controvertido.

6.1. Previamente, resulta necesario precisar que la resolución número cinco, fue impugnada únicamente por el Ministerio Público y la defensa técnica del imputado Iván Antony Tirado Rebaza; quedando consentida en el extremo que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra David Ruiz Loayza y Marco Antonio Hurtado Valdivia, como autores, del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial; al no ser objeto de impugnación y quedar firme.

6.2. En ese tenor, corresponderá dar respuesta a los cuestionamientos que han formulado los impugnantes, en atención a las pretensiones formuladas y ratificadas en los debates orales de la audiencia de apelación⁵.

b) Respecto al recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado Iván Tirado Rebaza contra la resolución número cinco.

b.1. Respecto a la pretensión de nulidad.

6.3. El recurrente principalmente alega que existe causal de nulidad al haberse evaluado los hechos como delito continuado y contradictoriamente expresarse co.mo concurso real de delitos, lo cual genera indefensión, pues correspondía que se analicen los presupuestos de la prisión preventiva por cada hecho.

Al respecto, de la revisión de la recurrida, se evidencia que el Juez de primera instancia (en los considerandos 3.5.1 al 3.5.8) realiza un análisis independiente -es decir, para cada hecho- sobre la presencia de graves y fundados elementos de convicción; y, si bien se agrupan los hechos investigados por delitos, esto se da con la finalidad de una mejor resolución del pedido, lo cual no repercute en el análisis respectivo.

Sumado a ello, debe tenerse presente que el Ministerio Público ha imputado la participación del imputado Iván Tirado Rebaza como cómplice primario de varios hechos punibles, a través del concurso real de delitos; por lo tanto, no es de recibo la alegación de un análisis del segundo y tercer presupuesto de

⁵ Conforme lo prevé el artículo 409.1 del Código Procesal Penal.

la prisión preventiva por cada hecho; tanto más, si no son hechos aislados y solo existe un requerimiento de prisión preventiva.

En consecuencia, carece de sustento la causal de nulidad invocada.

b.2. Respecto a la pretensión de revocatoria.

6.4. A propósito de la impugnación de esta medida coercitiva personal, debe tenerse en cuenta que amerita la reevaluación de los elementos de convicción presentados por las partes al momento en que se requirió la prisión preventiva, con el fin de verificar la concurrencia de los presupuestos necesarios para su aplicación⁶. En virtud a ello, procederemos a continuación con el reexamen de los elementos de convicción propuestos y valorados:

b.2.1. Análisis de los graves y fundados elementos de convicción:

6.5. En principio, cabe precisar que para la imposición de esta medida cautelar se hace necesaria la existencia de una “sospecha fuerte”, que implica concluir -desde una inferencia razonable- que el imputado es fundadamente sospechoso; esto es, que exista un alto grado de probabilidad de que el investigado puede ser autor o participe del delito objeto de proceso penal.

6.6. En el presente caso, se advierte un conjunto de indicadores (objetivos y subjetivos) que de momento vinculan al investigado -como cómplice primario- en los hechos punibles imputados (delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial). Así:

6.6.1. En torno a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el **hecho número cuatro**, en primer lugar, se tiene que no es objeto de cuestionamiento la presencia de una sospecha fuerte respecto a la solicitud de un beneficio económico que habría realizado de forma indirecta el efectivo policial David Ruiz Loayza, quien ejercía el cargo de instructor de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito

⁶ Casación N° 391-2011/Piura, fundamentos jurídicos 2.8. y 2.9.

de la Comisaria de Gregorio Albarracín, a la persona de Estanislao Mamani Espinoza, con el fin de no imponerle la papeleta por conducción en estado de ebriedad.

Los registros de comunicaciones entre el investigado Iván Tirado Rebaza y el efectivo policial David Ruiz Loayza, contiguas a la intervención policial de Estanislao Mamani Espinoza por conducir un vehículo en estado de ebriedad con fecha treinta de diciembre del dos mil veinte; nos permite inferir que, por medio del investigado (Tirado Rebaza), abogado defensor del infractor de las reglas de tránsito, se realizaron las coordinaciones en torno a la solitud del beneficio económico; tanto es así que, en el registro de comunicación número ocho, de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, coordinan sobre la entrega de una suma de dinero por parte del investigado, resaltando el efectivo policial la expresión “CIEN SOLES” luego de que el investigado le haya mencionado que va a dejar en la comisaria mil soles y aparte doscientos; lo cual género que el investigado indique finalmente que habían quedado con el infractor la suma total de “tres cincuenta”. Dicho acuerdo de la entrega de dinero, también se evidencia en el registro de comunicación Nro. 10, donde el imputado menciona al interlocutor “TONY” que en la comisaria deben dejarle mil soles, más el diez por ciento, y aparte “trescientos”.

El contexto de estas conversaciones se refuerza con la ausencia de papeletas de infracción al tránsito posteriores a la intervención policial, corroborado con el Récord de Sanciones obtenida por la Dirección de Circulación Vial de la Dirección General de Autorizaciones y Transportes, así como con el Oficio N° 143-2022-SGTSC/MPT (de fecha veintitrés de mayo del dos mil veintidós), por el cual la Sub Gerencia de Transporte Público de la Municipalidad Provincial de Tacna remite el récord de conductor de infracciones.

En consecuencia, se encuentra acreditado con alto grado de probabilidad que el investigado actuó como intermediario directo entre el infractor de las reglas de tránsito y el efectivo policial.

6.6.2. En torno a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el **hecho número cinco**, en primer lugar, se tiene que no es objeto de cuestionamiento la presencia de una sospecha fuerte respecto a la solicitud de un beneficio económico que habría realizado de forma indirecta el efectivo policial Jiampier Lévano Hernández a la persona de Julio Barrientos Marce, con el fin de no ponerlo a disposición de la Sección de Transito de la Comisaria de Gregorio Albarracín por haber conducido un vehículo automotor sin contar con licencia, SOAT y con la revisión técnica vencida.

Mediante el registro de comunicación Nro. 33, de fecha diecinueve de enero del dos mil veintiuno, entre el investigado y el interlocutor 2 - Julio Barrientos, se evidencia que este último le solicita ayuda al investigado para que pueda conversar con el policía que lo intervino; luego, al entregar el celular al efectivo policial, el investigado le confirma a Lévano Hernández que el infractor no es quejoso, que es tranquilo; motivo por el cual el efectivo policial le expresa que “yo lo voy a llevar puta le van a sacar unas tres lucas en tránsito on, por eso tiene que dejarse algo acá siquiera”; tras esta conversación, el investigado le indica al infractor que quede con el efectivo oficial para que solucionen el problema. Con este suceso histórico, resulta patente que el investigado participó como intermediario, dando su asentimiento para la concretización de la solicitud de un beneficio económico. Tal es así que el propio infractor Julio Barrientos Marce, mediante su declaración de fecha veintitrés de mayo del dos mil veintidós, reconoce la intervención del investigado.

El contexto de estas conversaciones se refuerza con la ausencia de papeletas de infracción al tránsito posteriores a la intervención policial, corroborado con la consulta en fuente abierta a través de la página web [https://recordconductor .mtc.gob.pe](https://recordconductor.mtc.gob.pe) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, conforme se tiene del Informe Policial 104-2022-PNP-DIRCOCOR-DIVIDCVCO-DEPIDCFVCO. Sobre el particular, el recurrente alega que la “fuente abierta” es información no validada; sin embargo, no tiene en cuenta que este elemento de convicción fue recabado en base a las

facultades conferidas a la Policía, según el artículo 68 del Código Procesal Penal; además, su posterior valoración se encuentra habilitada normativamente, dado que el artículo 325 del referido Código prevé que los actos de investigación sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación. En consecuencia, al haberse cumplido con las exigencias de legalidad en su obtención, incorporación y ulterior valoración, no es de recibo el agravio relativo a cuestionar la invalidez de dicha información, más aún, si esta fue recabada de páginas webs oficiales del Estado (Gobierno Digital).

6.6.3. En torno a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el **hecho número seis**, en primer lugar, se tiene que no es objeto de cuestionamiento la presencia de una sospecha fuerte respecto a la solicitud de un beneficio económico que habría realizado de forma indirecta el efectivo policial David Ruiz Loayza, quien ejercía el cargo de instructor de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Comisaria Gregorio Albarracín, a la persona de Edwin Rubén Aguilar Aguilar, con la finalidad de no imponerle la papeleta por conducir en estado de ebriedad.

Los registros de comunicaciones entre el investigado Iván Tirado Rebaza y el efectivo policial David Ruiz Loayza, contiguas a la intervención policial de Edwin Rubén Aguilar Aguilar por conducir un vehículo en estado de ebriedad con fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno; nos permite inferir que, por medio del investigado, abogado del infractor de las reglas de tránsito, se realizaron las coordinaciones sobre la solicitud del beneficio económico; tanto es así que, en el registro de comunicación número cuarenta (de fecha veintiuno de enero del dos mil veintiuno), el investigado le menciona al interlocutor número dos - Armando que debe de compartir ciento cincuenta soles de sus ganancias con "Ruiz" y con la persona encargada de la puerta de la comisaria. Además, se tiene las comunicaciones con un "familiar" del infractor, según el registro de comunicación número treinta y seis.

El contexto de estas conversaciones se refuerza con la ausencia de papeletas de infracción al tránsito posteriores a la intervención policial,

corroborado con la consulta en la página web <https://recordconductor.mtc.gob.pe> del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y con el Oficio N°156-2022-SGTSC/MPT (de fecha veintitrés de mayo del dos mil veintidós), por medio del cual la Sub Gerencia de Transporte Público de la Municipalidad Provincial de Tacna remite el récord de conductor de infracciones.

En consecuencia, se encuentra acreditado con alto grado de probabilidad que el investigado actuó como intermediario directo entre el infractor de las reglas de tránsito y el efectivo policial.

6.6.4. En torno a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el **hecho número siete**, en primer lugar, se tiene que no es objeto de cuestionamiento la presencia de una sospecha fuerte respecto a la solicitud de un beneficio económico que habría realizado de forma indirecta el efectivo policial David Ruiz Loayza, quien ejercía el cargo de instructor de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Comisaría de Gregorio Albarracín, a la persona de Richard Ari Mamani, con la finalidad de no imponerle la papeleta por conducir en estado de ebriedad.

Los registros de comunicaciones⁷ entre el investigado Iván Tirado Rebaza y el efectivo policial David Ruiz Loayza, contiguas a la intervención policial de Richard Ari Mamani por conducir en estado de ebriedad con fecha treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno; nos permite inferir que, por medio del investigado, abogado del infractor de las reglas de tránsito, se realizaron las coordinaciones sobre la solicitud del beneficio económico; tanto es así que, en el registro de comunicación se evidencia un interés directo sobre el estado del procedimiento en sede fiscal contra el infractor.

El contexto de estas conversaciones se refuerza con la ausencia de papeletas de infracción al tránsito posteriores a la intervención policial, corroborado con la consulta en la página web

⁷ Registro de comunicación número sesenta, de fecha treinta y uno de enero del dos mil veintiuno.

<https://recordconductor.mtc.gob.pe> del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

En consecuencia, se encuentra acreditado con alto grado de probabilidad que el investigado actuó como intermediario directo entre el infractor de las reglas de tránsito y el efectivo policial.

6.6.5. En torno a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el **hecho número ocho**, en primer lugar, se tiene que no es objeto de cuestionamiento la presencia de una sospecha fuerte respecto a la solicitud de un beneficio económico que habría realizado de forma indirecta el efectivo policial Marco Antonio Hurtado Valdivia, asignado a la Comisaria de Gregorio Albarracín, a la persona de Javier Condori Callusani, con el fin de no imponerle la papeleta por conducir en estado de ebriedad.

Los registros de comunicaciones⁸ entre el investigado Iván Tirado Rebaza y el efectivo policial Marco Antonio Hurtado Valdivia, contiguas a la intervención policial de la persona de Javier Condori Callusani por conducir en estado de ebriedad con fecha quince de febrero del dos mil veintiuno; nos permite inferir que, por medio del investigado, abogado del infractor de las reglas de tránsito, se realizaron las coordinaciones sobre la solicitud de un beneficio económico; tanto es así que, en el registro de comunicación se evidencia que el efectivo policial le comunica al investigado la existencia de un caso de peligro común, el mismo que según el acta de intervención N° 80 y el Informe Policial N° 51-2021-XIV-MACREGPO-REGPOLTAC/CGAL estaría referido a la intervención policial de Javier Condori Callusani.

El contexto de estas conversaciones se refuerza con la ausencia de papeletas de infracción al tránsito posteriores a la intervención policial, corroborado con el Oficio N° 165-2022-SGTPT-GTSC/MPT y el Oficio N° 164-2022-SGTPT-GT SC/MPT, mediante el cual se remite el récord de papeletas.

⁸ Registro de comunicación número siete, de fecha dieciséis de febrero del dos mil veintiuno.

En consecuencia, se encuentra acreditado con alto grado de probabilidad que el investigado actuó como intermediario directo entre el infractor de las reglas de tránsito y el efectivo policial.

6.6.6. En torno a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el **hecho número diez**, se tiene el registro de comunicación número cuarenta y tres (de fecha veintiséis de marzo del dos mil veintiuno), donde el interlocutor Hernán le comunica al investigado que se encuentra detenido en la comisaría de Gregorio Albarracín y le pregunta ¿Cómo podríamos salir de esta?; luego del mismo número de celular se comunica un efectivo policial con el investigado, indicándole con suma confianza la situación de Hernán y además preguntándole ¿si va a bajar a jugarlo o no?, además, que les meta terror y que “pase como amigo ya tu ve eso de ahí”. Ahora la identidad de este efectivo policial se esclarece con la declaración del infractor Hernán Quiñones Copaja (de fecha veintitrés de mayo del dos mil veintidós), quien manifiesta que el policía que se encontraba a cargo era “CAMPOS”; asimismo, con la relación de Servicio Policial de la Comisaría PNP Gregorio Albarracín, se acredita que el efectivo policial Sidger Luis Campos Velásquez se encontraba de turno el día de los hechos; por lo cual, resulta factible inferir que el efectivo policial que mencionó “si va a bajar a jugarlo o no” es el citado precedentemente.

El suceso histórico descrito permite inferir que, a través del investigado Tirado Rebaza, se realizaban las coordinaciones relativas a la solicitud del beneficio económico a favor del efectivo policial, con el fin de no imponerle al infractor Hernán Quiñones Copaja la multa por haber cometido dos infracciones graves reguladas en el Decreto Supremo N° 006-2020-IN. Esto se corrobora además con la declaración del infractor, quien manifiesta que el abogado Iván Tirado al ingresar a la Comisaría le indica que los policías querían quinientos soles para dejarlos libres; con ello se verifica que la expresión “bajar para jugarlo” hacía referencia a la solicitud de una suma dineraria.

En consecuencia, se encuentra acreditado con alto grado de probabilidad que el investigado actuó como intermediario directo entre el infractor y el efectivo policial.

6.6.7. En torno a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con el **hecho número quince**, en primer lugar, se tienen los registros de comunicaciones⁹ entre el investigado y el efectivo policial Javier Paredes Velasco, contiguas a la intervención policial de Alfredo Julio Ramírez Capaquera por conducir en estado de ebriedad con fecha seis de agosto del dos mil veintiuno; nos permite inferir que, por medio del investigado, abogado del infractor de las reglas de tránsito, se realizaron las coordinaciones en torno a la solicitud de un beneficio económico; tanto es así que, en el registro de comunicación número uno (de fecha siete de agosto del año dos mil veintiuno), el interlocutor Paredes le indica al investigado para que hable con el intervenido para “convencerlo” y “si te atraca me avisas pe normal”; el mismo interés se verifica en el registro de comunicación número cuatro y seis, donde le recalca el investigado que “¿si lo vamos a chambear verdad?”; además, en el registro de comunicación ocho el investigado le menciona al interlocutor Paredes que está hablando en clave.

El contexto de estas conversaciones se refuerza con el Informe Policial N°104-2022-PNP-DIRCOCOR-DIVIDCVCO-DEPIDCFVCO, que da cuenta respecto a la intervención policial de la persona de Alfredo Julio Ramírez Capaquera por conducir un vehículo en estado de ebriedad; el Oficio N°101-2022-MP-1°D -FPMC-GAL-DF-TACNA, por medio del cual se informa que el infractor de las reglas de tránsito se sometió al principio de oportunidad, en el cual participó como abogado el investigado; y la relación de servicio policial de la Comisaria PNP CRNL Gregorio Albarracín, que acredita que el efectivo policial Paredes Velasco se encontraba de servicio en el cargo de instructor en la fecha de la intervención policial.

⁹ Registros de comunicación números uno, cuatro, seis y ocho.

En consecuencia, se encuentra acreditado con alto grado de probabilidad que el investigado actuó como intermediario directo entre el infractor de las reglas de tránsito y el efectivo policial.

6.6.8. En torno al **hecho número nueve**, no será objeto de pronunciamiento por cuanto el Juez de primera instancia ha considerado que no existen graves y fundados elementos de convicción que lo vinculen como cómplice primario en el hecho punible imputado; lo cual no fue cuestionado por el representante del Ministerio Público.

6.7. Siendo así, el nivel de sospecha grave requerido para la configuración del primer presupuesto de la prisión preventiva, en el caso de autos, se cumple no en virtud de la cantidad de elementos de convicción aportados o su calidad individual, sino por la concatenación y congruencia que existen entre todos ellos, esto es, la solidez que manifiestan a partir de su análisis en conjunto.

b.2.2. Análisis de la prognosis de pena:

6.8. De la revisión de los delitos imputados (cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y tráfico de influencias), se tiene que regulan en su extremo mínimo una pena superior a cuatro años; por lo que, existiendo un concurso real de delitos, se advierte que la pena a imponerse superará largamente el mínimo exigido como presupuesto procesal material. Este Tribunal considera que no se requiere mayor argumentación respecto a este tópico, toda vez que este extremo no ha sido cuestionado por el recurrente.

b.2.3. Análisis del peligro procesal:

6.9. Previamente, cabe señalar que para la acreditación del riesgo el Juzgado debe apreciar y declarar la existencia del peligro a partir de datos aportados a la causa, que den cuenta de la capacidad del imputado de huir u obstruir la labor de la investigación¹⁰.

¹⁰ Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116, fundamento jurídico 40.

6.10. En lo relativo al peligro de fuga, se advierte que el imputado Iván Tirado Rebaza, pese a contar con arraigo domiciliario (así lo hace notar el Juzgado de primer grado), no contaría con los arraigos laboral y familiar de calidad. Pues, si bien en esta instancia se ha presentado documentación para acreditar que el imputado se dedicaría al rubro de la gastronomía, la misma es de data muy antigua (2016); lo cual impide inferir que, previo a su detención, haya realizado actividad económica que se prolongue en el tiempo, y lo catalogue como un arraigo de calidad.

Por otra parte, los cuestionamientos respecto a un análisis discriminatorio del arraigo familiar, carecen de sustento, debido a que el Juez de primer grado no sustenta la ausencia de este arraigo por el hecho de no tener un compromiso marital, unión de hecho o hijos. Por el contrario, sustenta la misma en base a la carencia de información adicional de que el imputado este procediendo a la manutención de sus padres o que estén bajo su cargo o cuidado. Ahora bien, en esta sede se alegó que, tanto la madre y el tío del imputado, dependerían de este; sin embargo, tampoco se presentó otros elementos de convicción idóneos que brinden detalles o corroboren las declaraciones juradas; lo cual relativiza dicho arraigo familiar; tanto más, si no se ha logrado corroborar que Severina Rebaza Henríquez, madre del imputado, se encuentra imposibilitada físicamente o delicada de salud; lo mismo sucede con el tío del imputado, Felipe Rebaza Henríquez, pues, sobre el particular, resulta una tesis novísima y tampoco se ha acreditado que este familiar dependa exclusivamente de los cuidados del imputado.

Lo expuesto, sumado a la gravedad de la pena probable (en base a los fundados y graves elementos de convicción), permite concluir que el imputado Iván Tirado Rebaza puede fácilmente desligarse del proceso.

6.11. En suma, los argumentos de la apelación no revisten suficiente entidad para desvirtuar los fundamentos del auto de primera instancia; por lo que, no resulta amparable.

a) Respecto al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución número cinco.

6.12. El representante del Ministerio Público solicita se revoque la recurrida en el extremo que declara infundada el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra del imputado Jhoel Huanca Ticona por los delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Empero, pese a la naturaleza de la pretensión postulada, resulta palmario de la lectura integral de los argumentos del recurso, que gran parte de los aspectos postulados se dirigen a evidenciar la existencia de defectos en la motivación (ausencia de motivación y motivación incongruente).

En tal sentido, en aplicación de las facultades conferidas en el artículo 409º.1 del Código Procesal Penal, corresponderá efectuar una revisión formal con el fin de descartar o no la existencia de irregularidades que afectan el contenido esencial del derecho a una debida motivación-justificación de las resoluciones judiciales.

6.13. Este Colegiado Superior, luego de inspeccionar el texto y contexto de la decisión de primer grado (estructura y justificación externa), advierte que existe una motivación aparente¹¹ e incongruente¹², en razón de que se han introducido fundamentos vagos y genéricos, así como se ha desviado el objeto proceso delimitado y dejado incontestado la misma, lo cual afecta el contenido esencial del derecho a una debida motivación-justificación.

6.14. Así, en el fundamento 3.6.4. de la recurrida, el Juez de primera instancia no publica las razones por las cuales considera que no existen elementos de convicción que vincule al investigado como “instigador” del

¹¹ Inexistencia de motivación o motivación aparente. Esta fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 0 0728-2008-PHC-TC, con fecha trece de octubre del dos mil ocho, fundamento jurídico 7.

¹² La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las resoluciones, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengán planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviación que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 00728-2008-PHC-TC, con fecha trece de octubre del dos mil ocho, fundamento jurídico 7.

delito de tráfico de influencias, siendo que sin mayor justificación establece que “a criterio de esta judicatura, de los elementos de convicción sustentados para este hecho dieciséis, no existe elementos de convicción que vincule al investigado”; lo citado evidencia que solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato de motivación, en base a premisas sin sustento fáctico. No basta con remitirse a la descripción de los elementos de convicción carentes de pronunciamiento sobre el aporte positivo o negativo respecto a la tesis fiscal, esto es el reforzamiento de la resolución criminal por parte del imputado.

6.15. Por otro lado, sobre el análisis relativo a los graves y fundados elementos que vinculen al imputado Jhoel Huanca Ticona con el delito de obstrucción a la justicia, el Juez de primera instancia ha considerado que la conducta de los imputados ha quedado en fase preparatoria; por lo tanto, no es punible. Sin embargo, en el presente caso, no ha evaluado la concurrencia de la tentativa. Pues, al encontrarse estructurado como un delito de resultado¹³ (requiere para su consumación que el testigo preste falsa declaración en un proceso penal), resulta admisible una tentativa de quien ejerce actos inductores para que el testigo preste una declaración falsa, pese a no lograr dicho cometido.

Que, si bien en el requerimiento de prisión preventiva no se atribuye la presencia de una tentativa, de sus fundamentos resulta palmaria la necesidad de realizar una evaluación al respecto.

6.16. En consecuencia, si bien el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 habilita que el Juez de primera instancia no se pronuncie sobre los demás presupuestos de la prisión preventiva cuando no concurre el primer o segundo presupuesto. También es verdad, que la patología de la motivación advertida en el análisis de los graves y fundados elementos de convicción repercute negativamente en la posición del Juzgado, quien omite pronunciarse sobre el segundo y tercer presupuesto de la prisión preventiva.

¹³ Peña Cabrera Freyre, Alonso; Delitos Contra la Administración de Justicia; Tercera Edición; Lima: A&C Ediciones Jurídicas; 2021; p. 321.

6.17. Dentro de este marco, observamos un mensaje judicial por debajo del estándar de una motivación suficiente, razonada y congruente, lo que conlleva irremisiblemente a la declaración de nulidad, puesto que, por su naturaleza y gravedad, no puede ser convalidada ni subsanada en esta instancia revisora, bajo riesgo de vulnerar el derecho de defensa y con ello el principio del debido proceso, lo cual es preciso cautelar.

c) Respecto al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución número veinticinco.

6.18. De la misma manera que en el acápite precedente, resulta palmario de la lectura integral de los argumentos del recurso de apelación, que gran parte de los aspectos postulados se dirigen a evidenciar defectos en la motivación (motivación insuficiente e incongruente).

En tal sentido, en aplicación de las facultades conferidas en el artículo 409º.1 del Código Procesal Penal, corresponderá efectuar una revisión formal con el fin de descartar o no la existencia de irregularidades que afectan el contenido esencial del derecho a una debida motivación-justificación de las resoluciones judiciales.

6.19. Inspeccionada la recurrida, se advierte que el Juez de primera instancia desvía y altera el debate procesal respecto a los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados Jhon Erald Clemente Velásquez (hechos números nueve y trece), Sidgar Luis Campos Velásquez (hecho número diez) y Javier Branko Paredes Velasco (hecho número quince) con la comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Pues, para descartar la concurrencia del primer presupuesto de la prisión preventiva, en el análisis de cada caso, considera fundamentalmente que la existencia de las papeletas de infracción personales, desvirtúan la hipótesis de la Fiscalía. Sin embargo, ignora que, para la configuración del delito, no se requiere que el efectivo policial materialice el incumplimiento de sus funciones, sino, por el contrario, al ser

un delito de actividad, se consuma con el solo acto de solicitar o pedir¹⁴; lo cual debió ser el principal objeto de análisis.

6.20. Sumado a ello, se evidencia una motivación contradictoria, debido a que en los fundamentos de la recurrida introduce premisas relativas a justificar la inconcurrencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al investigado Iván Antony Tirado Rebaza con los hechos imputados, cuando en la emisión de la resolución número cinco (de fecha treinta y uno de mayo del dos mil veintidós), resuelve de manera contraria su situación jurídica. Esto deberá ser dilucidado debidamente, pues, al ser el nexo principal entre los efectivos policiales y los infractores de las reglas de tránsito, su participación delictiva resulta imprescindible para materializar las solicitudes respectivas.

6.21. En consecuencia, si bien el Acuerdo Plenario 1-2019/CIJ-116 habilita que el Juez de primera instancia no se pronuncie sobre los demás presupuestos de la prisión preventiva cuando no concurre el primer o segundo presupuesto, la patología de la motivación advertida en el análisis de los graves y fundados elementos de convicción repercute negativamente en la posición del Juzgado, quien omite pronunciarse sobre el segundo y tercer presupuesto de la prisión preventiva.

6.22. En torno al extremo que declara infundada la prisión preventiva en contra de Jiamper Lévano Hernández, se evidencia una motivación insuficiente, por cuanto, en lo relativo al arraigo laboral, no se ha evaluado que la efectividad de su actividad policial ha quedado en suspenso producto de los cargos que le son atribuidos; asimismo, sobre el análisis de la magnitud del daño causado, se aparta injustificadamente de la doctrina jurisprudencial vinculante¹⁵, donde se establece que este criterio no se puede entender como una referencia a la reparación civil, sino a la gravedad del delito, vinculado con las circunstancias que agravarían la pena a imponer.

¹⁴ Recurso de Nulidad N°1875-2015/Junín, fundamento jurídico octavo. Recurso de Nulidad N°2773-2013/Huánuco, fundamento jurídico quinto.

¹⁵ Casación N°626-2013/Moquegua, fundamento jurídico cuadragésimo séptimo

6.17. Dentro de este marco, observamos un mensaje judicial por debajo del estándar de una motivación suficiente, razonada y congruente, lo que conlleva irremisiblemente a la declaración de nulidad, puesto que, por su naturaleza y gravedad, no puede ser convalidada ni subsanada en esta instancia revisora, bajo riesgo de vulnerar el derecho de defensa y con ello el principio del debido proceso, lo cual es preciso cautelar.

NOVENO: Conclusión.

En primer lugar, acordada la no atendibilidad de la apelación formulada por la defensa técnica del imputado Iván Antony Tirado Rebaza, es que corresponde ratificar formal y sustancialmente la resolución número cinco, en el extremo que declara fundada la prisión preventiva en su contra.

En segundo lugar, acordada la atendibilidad de la apelación formulada por el representante del Ministerio Público, es del caso de declarar la nulidad parcial de la resolución número cinco, en el extremo que declara infundada la prisión preventiva contra el imputado Jhoel Huanca Ticona por la comisión del delito de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

Finalmente, acordada la atendibilidad del recurso de apelación formulado por el representante del Ministerio Público, es del caso de declarar la nulidad de la resolución número veinticinco que declara infundada el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos en contra Jhon Erald Clemente Velásquez, Sidgar Campos Velásquez, Javier Branko Paredes Velasco y Jampier Lévano Hernández por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 12° y 41° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala Penal Superior de Tacna por unanimidad,

HA RESUELTO:

1° CONFIRMAR EN PARTE la resolución **número cinco**, en el extremo que declara **FUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva dictada contra Iván

Tirado Rebaza como cómplice primario del delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, en agravio del Estado; con lo demás que contiene.

2° Declarar la **NULIDAD** de la resolución **número cinco**, en el extremo que declara **INFUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra Jhoel Huanca Ticona por los delitos contra la Administración Pública en las modalidades de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, en agravio del Estado; con lo demás que contiene. Y **ORDENARON** que otro Juez, inmediatamente proceda a citar a nueva audiencia y dicte la resolución correspondiente; y los devolvieron.

3° Declarar la **NULIDAD** de la resolución **número veinticinco**, que declara **INFUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra los investigados Jhon Erald Clemente Velásquez, Sidgar Luis Campos Velásquez y Javier Branko Paredes Velasco por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado, con lo demás que contiene; asimismo, declara **INFUNDADO** el requerimiento de prisión preventiva en los seguidos contra de Jampier Lévano Hernández por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado, con lo demás que contiene. Y **ORDENARON** que otro Juez, inmediatamente proceda a citar a nueva audiencia y dicte la resolución correspondiente; y los devolvieron.

Tómese razón y hágase saber.-

S.S.

BERMEJO RIOS

FRANCO APAZA

SAN ROMAN AQUISE.

93.7 FM.